

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



JUZGADO TREINTA DE FAMILIA

Bogotá D. C., trece (13) de agosto de dos mil veinte (2020)

Rad: 11001-31-100-30-2020-00237-00

Clase de proceso: Acción de Tutela

Procede este Despacho a proferir sentencia dentro de la Acción de Tutela instaurada a nombre propio por el ciudadano **CARLOS JOSE AVILAN HERMAN** identificado con la cedula de ciudadanía No. 19.339.119 contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES**.

ANTECEDENTES

El ciudadano **CARLOS JOSE AVILAN HERMAN** identificado con la cedula de ciudadanía No. 19.339.119 a nombre propio inicia acción de tutela contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES** por considerar que se le están vulnerando los **DERECHOS FUNDAMENTALES DE PETICIÓN, DEBIDO PROCESO, SEGURIDAD SOCIAL Y MINIMO VITAL**.

HECHOS Y PRETENSIONES

Indica el accionante que nació el 21 de julio de 1956 y actualmente tiene 64 años de edad, por lo que considera ser sujeto de especial protección en atención a las disposiciones contempladas en el artículo 44 de la Constitución Política.

Refiere que a mediados del año 1976 y hasta el 15 de septiembre de 1977 ingreso a laborar para la Sociedad Luis Carlos Sarmiento Angulo, siendo menor de edad por lo cual las primeras semanas cotizadas al Sistema de Seguridad Social fueron cargadas con el número de su tarjeta de identidad postal 1965107 o tarjeta de identidad 560721105147; sin embargo, dichos ciclos cotizados no aparecen reflejados en su historia laboral.

Señala que el 02 de mayo de 1978 inicio sus actividades laborales para la sociedad MASSAZA VERONA REMO hasta el día 31 de agosto de 1989, identificada con el número de aportante 1002801363.

Manifiesta que revisado detalladamente el reporte de semanas cotizadas en pensiones del 06 de julio de 2020 emitido por la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, verifica que hay ciclos que se encuentran reportados antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, y que presentan mora en el pago, por lo que es posible advertir que su empleador MASSAZA VERONA REMO únicamente pago la cotización de los ciclos mayo de 1978 y junio de 1978 (8, 5714 semanas) las que se ven reflejadas en la historia laboral; pero no pago las cotizaciones de los ciclos comprendidos de julio de 1978 y agosto de 1989,

es decir 582,85 semanas en mora; ciclos que fueron reportados antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.

Indica que el 09 de agosto de 2012, solicito ante el antiguo Seguro Social el reporte de semanas cotizadas, certificándole 751.29 semanas al 30 de abril de 1994, sin embargo, en la certificación no aparecen las semanas cotizadas a la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo cuando fue menor de edad, apareciendo únicamente los ciclos de mayo y junio de 1978 con su empleador MASSAZA VERONA REMO.

Refiere que si la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones no se hubiese sustraído de las obligaciones contenidas en el artículo 23 de la Ley 100 de 1993, para la entrada en vigencia de esa Ley, contaría mínimo con (1.334.14); cumpliendo los requisitos mínimos exigidos para la prestación.

Que mediante solicitud elevada a la Administradora Colombiana de Pensiones-Colpensiones requirió el traslado de régimen por cumplir los requisitos exigidos en Sentencia SU 062 de 2010; y en respuesta dada mediante oficio BZ2012_476077 del 06 de febrero de 2013 manifiesta: *“... Nos permitimos informarle que su solicitud radicada como se indica en el asunto, ha sido aceptada en forma satisfactoria. Por lo anterior tenemos el agrado de darle la cordial bienvenida a su Administradora de Pensiones, COLPENSIONES...”*.

Señala que una vez reunió los requisitos el 23 de julio de 2018 solicito la prestación económica correspondiente a la pensión de vejez – régimen de transición – radicada bajo el No. 2018_8582924 y a través de la Resolución No. SUB 194574 del 23 de julio de 2019 fundamenta su negativa así: *“... A la fecha, Colpensiones se encuentra adelantando verificación preliminar, conforme a lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley 1450 de 2011 y en la resolución interna No. 555 del 30 de noviembre de 2015, nos permitimos que la solicitud presentada por usted será atendida una vez finalice la actuación antes referida...”*.

Manifiesta que al no estar conforme con la decisión adoptada y estando en termino presento recurso de reposición y en subsidio apelación quedando radicada el 06 de agosto de 2019 bajo el No. 2019_10601370; mediante Resolución No. SUB 271838 del 02 de octubre de 2019 se desato el recurso de reposición que confirmo en todas y cada una de sus partes la Resolución No. SUB 194574 del 23 de julio de 2019, indicando: *“... que, de conformidad al ordenamiento vigente antes mencionado, el señor AVILAN HERMAN CARLOS JOSE, cumplió 62 años de edad el 21 de julio de 2018, razón por la cual mediante radicado 2019_4946373, se instancio a la Dirección Nacional de Afiliaciones con el fin que revisara la validez del traslado del asegurado, respondiendo lo siguiente:*

Revisados en los diversos aplicativos, se puede verificar que el ciudadano CARLOS JOSE AVILAN HERMAN, CC 19339119, registra OBP 747 semanas a abril de 1994; es decir no cumple el requisito de 750 semanas. Por otra parte, y de acuerdo a la fecha de nacimiento (21/07/1956), cumplió la edad (62 años), el 21/07/2018; es decir debió haberse trasladado antes del 21/07/2008; verificando el aplicativo CONSULTA AFILIADOS y SIAFP, el ciudadano registra traslado de un fondo de pensión al ISS el 31/10/2012, es decir tampoco cumple con el requisito.

Así las cosas, el ciudadano no cumple con ninguno de los requisitos, para lo cual se está oficiando a la AFP COLFONDOS informando de dicha situación.

Que conforme lo anterior, el traslado efectuado por el solicitante del RAIS a COLPENSIONES no es válido, toda vez que no cumple la condición del literal e del artículo 2 de la ley 797 de 2003, en cuanto se realizó cuando faltaba menos de 10 años para cumplir la edad para tener el derecho a la pensión vejez ...”.

Indica que mediante la Resolución No. DPE 12343 del 31 de octubre de 2019 se resolvió el recurso de apelación confirmando en todas sus partes la Resolución No. SUB 194574 del 23 de julio de 2019.

Señala que la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES declaro no valido el traslado de régimen e informó a la AFP COLFONDOS la decisión adoptada; por lo que solicito ante la accionada certificación de afiliación y mediante oficio del 29 de abril de 2020 se le certifica que estuvo afiliado al Régimen de Prima Media con prestación definida (RPM) y su estado es: trasladado a otro fondo, además, solicito certificación de afiliación ante la AFP COLFONDOS y mediante oficios del 29 de abril de 2020 y 05 de junio de 2020, certifican que se encuentra afiliado a PENSION OBLIGATORIA desde el día 26 de abril de 1994.

Que el 02 de agosto de 2019, la AFP COLFONDOS le envía comunicación, informándole: “ (...) como es de su conocimiento, los afiliados al sistema general de pensiones que se encuentren a diez (10) años o menos para cumplir la edad para obtener el derecho a pensión, no podrán trasladarse de régimen, salvo que hayan cumplido con los presupuestos establecidos en la sentencia SU-062 de 2010, a saber...

... Conforme a lo señalado, le informamos que Colpensiones validó los requisitos de viabilidad del traslado de régimen hacia su entidad, donde se verifico usted no cumplió con el primer requisito esto es, contar al 1 de abril de 1994, con 750 semanas cotizadas...”; solicitándole además, que les remita a más tardar dentro de los quince (15) días siguientes al recibo de la comunicación, los soportes que acrediten las 750 semanas cotizadas al 01 de abril de 1994, recordando que “ ... En el evento de no poder soportar el cumplimiento del requisito antes mencionado, le comunicamos que su solicitud de traslado quedara sin efectos legales, por lo cual, continuara vinculado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad a cargo de esta sociedad ...”.

Señala que el 22 de agosto de 2019 radico ante AFP COLFONDOS escrito solicitando la ampliación de términos por la complejidad de la consecución documental y el 30 de septiembre de 2019 radico comunicación con los datos que había obtenido.

Afirma que el 28 de mayo de 2020, elevo ante Colpensiones solicitud de historia laboral unificada bajo los números de identificación de su tarjeta de identidad postal, tarjeta de identidad y cedula de ciudadanía y mediante comunicación del 12 de junio de 2020 le informan que: “ ... de manera atenta, nos permitimos informar que una vez verificada la base de datos de Colpensiones, dando respuesta a su solicitud mediante el cual requiere la historia laboral del afiliado CARLOS JOSE AVILAN HERMAN cedula de ciudadanía 19339119, me permito indicar que de conformidad a lo establecido en la ley 1450 de 2011 esta entidad se encuentra adelantando investigación administrativa, en aras de verificar inconsistencias en su historia laboral.

Por lo anterior, una vez finalizado el procedimiento de investigación administrativa se le informara de las decisiones adoptadas, a fin de tomar los correctivos a que haya lugar ...”.

En razón a lo anterior pretende que el Juzgado tutele los derechos fundamentales **DE PETICIÓN, DEBIDO PROCESO, SEGURIDAD SOCIAL Y MINIMO VITAL** y en consecuencia se ordene a la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES** el reconocimiento y pago de la pensión vejez del señor **CARLOS JOSE AVILAN HERMAN** bajo el **REGIMEN DE TRANSICIÓN**, por cuanto a la entrada en vigencia del Sistema General, es decir, al 01 de abril de 1994, contaba con más de 15 años de servicio cotizado.

PRUEBAS

La parte accionante anexa con el escrito tutelar, los siguientes documentos:

- Reporte de semanas cotizadas en pensiones –periodo de informe: enero 1967 julio/2020- Actualizado a: 06 julio 2020.
- Copia simple de la cedula de ciudadanía del señor CARLOS JOSE AVILAN HERMAN Tarjeta de identidad postal No. 1965107
- Certificado de inscripción de registro civil expedido por la Registraduria Nacional del Estado Civil.
- Escrito dirigido al señor CARLOS JOSE AVILAN HERMAN de fecha 06 de febrero de 2013 expedido por Colpensiones.
- Resolución Número SUB 194574 del 23 de julio de 2019 “POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN TRÁMITE DE PRESTACIONES ECONÓMICAS EN EL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACIÓN DEFINIDA VEJEZ - ORDINARIA”.
- Tramite de Notificación: 2019_ 9966922
- Certificado expedido por la Administrado Colombiana de Pensiones – Colpensiones
- Certificado expedido por Colfondos S.A Pensiones y Cesantías, 29 de abril de 2020.
- Certificado expedido por Colfondos,el 05 de junio de 2020.
- Reporte de semanas cotizadas en pensiones expedido por el Seguro Social
- Escrito del 02 de agosto de 2019 expedido por Colfondos
- Escrito presentado a Colfondos SAcon fecha 22 de agosto de 2019.
- Escrito presentado a Colfondos SA el 30 de septiembre de 2019.
- Escrito presentado ante la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES y radicado bajo el No. 2020-5223279 del 28 de mayo de 2020.
- Oficio BZ2020_5253247-1112294 del 12 de junio de 2020 expedido por Colpensiones y dirigido a FRANCISCO JAVIER GARZON RIVERA.
- Pantallazo de la página digital de Colpensiones de los tiempos cotizados a Colpensiones.
- Reporte de Polisomnograma respecto de CARLOS JOSE AVILAN HERMAN
- Certificado médico expedido por la Clínica de Marly S.A – Servicio de cardiología
- Historia clínica expedida por la Clínica de Marly
- Reporte de Afiliaciones de una Persona en el Sistema
- Registro civil de nacimiento de Alejandra Avilan Caldas
- Registro Civil de nacimiento de Daniel Felipe Avilan Caldas
- Acta de matrimonio Civil.
- Tramite de Notificación: 2019_13385017

-Resolución No. SUB 271838 del 02 de octubre de 2019 “por medio de la cual se resuelve un trámite de prestación económica en el régimen de prima media con prestación definida (vejez- recurso de reposición)”.

-Resolución No. DPE 12343 del 31 de octubre de 2019 “por medio de la cual se resuelve un trámite de prestaciones económicas en el régimen de prima media con prestación definida (vejez- recurso de apelación)”.

ACTUACIÓN PROCESAL

1.-Admitida la tutela el 30 de julio de 2020, se ordenó la notificación a la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES**; y se vinculó **COLFONDOS – FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS EN COLOMBIA, ORGANIZACIÓN LUIS CARLOS SARMIENTO ANGULO, MAZZASA VERONA REMO** para que en el término de dos (2) días se pronunciaran sobre los hechos materia de la presente acción.

2.- El 31 de julio de 2020, se notificó a través del correo institucional del Juzgado a la **ORGANIZACIÓN LUIS CARLOS ANGULO**, a la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES** y a **COLFONDOS FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS EN COLOMBIA** informando sobre la admisión de la presente tutela, adjuntando copia de la referida solicitud.

3.- Respecto de la notificación a la empresa **MAZZASA VERONA REMO** obra informe secretarial advirtiéndole que no obra dato alguno para proceder de conformidad.

3.- Dentro del término legal conferido allegó contestación a la acción de tutela la accionada **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES y COLFONDOS FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS EN COLOMBIA**.

CONTESTACIÓN ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES.

La accionada refirió: “(...) teniendo en cuenta lo pretendido y de conformidad con los hechos de la acción de tutela, fue verificado el sistema de información de esta entidad y se puso constatar que Colpensiones a través de la Dirección de Prestaciones Económicas, dio respuesta de fondo a la petición de reconocimiento de la pensión de vejez solicitada por el accionante, en el siguiente:

Que el señor AVILAN HERMAN CARLOS JOSE, identificado con cedula de ciudadanía No. 19.339.119, solicita el 23 de julio de 2018 el reconocimiento y pago de una pensión de vejez, radicada bajo el No. 2018_8582924.

Que mediante Resolución Nro. SUB 194574 de 23 de julio de 2019 no se accedió a la solicitud de pensión de vejez solicitada por el señor AVILAN HERMAN CARLOS JOSE, ya identificado.

Que la anterior Resolución se notificó el 24 de julio de 2019, y el señor AVILAN HERMAN CARLOS JOSE en escrito presentado el 06 de agosto de 2019, radicado bajo el número 2019_10601370, interpuso recurso de reposición en subsidio de apelación, previas las formalidades legales señaladas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Que mediante Resolución No. SUB 271838 del 02 de octubre de 2019, se resolvió el recurso de reposición interpuesto por el señor AVILAN HERMAN CARLOS JOSE, en el sentido de confirmar en todas y cada una de las partes el acto administrativo recurrido, teniendo en cuenta que el mismo se encontraba decidido conforme a derecho.

Por lo anterior y teniendo en cuenta apelación presentada mediante Resolución DPE 12343 del 31 de octubre de 2019, por medio de la cual se resolvió:

ARTICULO PRIMERO: Confirmar en todas y cada una de sus partes la Resolución No. SUB 194574 del 23 de julio de 2019, conforme el recurso presentado por el señor AVILAN HERMAN CARLOS JOSE, ya identificado, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese al (los) solicitantes (s) y/o apoderado (s) saber que con la presente queda agotada la actuación administrativa”.

Los mencionados actos administrativos se encuentran notificados como se evidencia en soportes adjuntos y en lo manifestado por el accionante en el escrito de tutela.

De igual manera y en atención a la petición presentada 28 de mayo de 2020 en la que solicita la corrección de la historia laboral, por lo que esta entidad mediante oficio BZ2020-5253247-1112294 del 12 de junio de 2020 dio respuesta a la solicitud presentada, sin que se evidencie petición pendiente por ser atendida por Colpensiones”.

CONTESTACIÓN COLFONDOS.

La entidad accionada refirió: “PRIMERO: El señor CARLOS JOSE AVILAN HERMAN identificado con cedula de ciudadanía 193399119, presenta cuenta ACTIVA en esta Sociedad Administradora con fecha de solicitud 26 de abril de 1994 y con fecha de efectividad 01 de mayo de 1994, producto de un traslado de REGIMEN PENSIONAL proveniente desde COLPENSIONES. SEGUNDO: El señor CARLOS JOSE AVILAN HERMAN presento solicitud a Colfondos respecto al traslado de aportes en el cual se le informó:

Señor (a):
CARLOS JOSE AVILAN HERNAN
avilancarl@hotmail.com

Radicado:200508-000576

(...) en atención a su comunicación recibida en días anteriores en el cual nos solicita definición pensional, le informamos lo siguiente:

Su caso fue escalado a Colpensiones para validación de semanas y conformar si era procedente un traslado por régimen de transición, y que dicha entidad confirmo que no cumplía con el requisito de 750 semanas cotizadas al 01 de abril de 1994.

Ahora bien, teniendo en cuenta que usted presenta vinculación activa al Fondo de Pensiones Obligatorias administrado por Colfondos S.A y cuenta con la edad establecida por la Ley 100 de 1993 para poder radicar formalmente su solicitud de pensión. No obstante, no evidenciamos radicación formal de los formatos establecidos para el traite de pensión /devolución de saldos.

No obstante lo anterior, antes de formalizar proceso de pensión /devolución de saldos, se debe gestionar el debido proceso de normalización en la historia laboral , por tanto anexamos para su revisión , la última liquidación de su bono pensional realizada por la Oficina de Bonos Pensionales (OBP) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; correspondiente a un bono pensional tipo A modalidad 2, si está de acuerdo con la misma debe diligenciar la información que registra al final , punto “ 10. Solicitud Emisión Bono” de lo contrario, si evidencia que falta historia laboral, en relación a empresas del sector público es necesario que nos indique de cada tiempo faltante:

TERCERO: Así las cosas, y como se evidencia en el documento adjunto, nuestro afiliado no puede ser beneficiario del traslado por el régimen de transición, dado que no cumple con el requisito 11.3.1., ya que según la consulta de la historia laboral reporta en la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Crédito y Hacienda público NO reporta las 750 semanas que se requieren.

CUARTO: Es importante señalar, que Colfondos SA no tiene la competencia legal para declarar la NULIDAD de una afiliación, ni proceder con el traslado si el fondo de pensiones al que se quiere trasladar el afiliado no lo solicita.

(...)

SEXTO: A la fecha ni el accionante, ni COLPENSIONES han radicado solicitud alguna para el traslado de los aportes ante esta sociedad administradora”.

RESPUESTA GRUPO AVAL.

La entidad vinculada refirió: “Grupo Aval no tiene conocimiento de los hechos mencionados en el escrito de tutela, toda vez que mi representada: no es parte de las relaciones jurídicas mencionadas en el escrito, no conoce los documentos mencionados en el escrito de tutela, ni tiene información relacionada con el caso del ACCIONANTE.

(...)

Por las razones anteriormente expuestas, atentamente solicito absolver a mi representada frente a cualquier petición del accionante”

CONSIDERACIONES

Aspectos preliminares

Este Juzgado es competente para conocer de la presente acción, por mandato de los artículos 86 de la Constitución Nacional, 37 del Decreto 2591 de 1991; numeral 1°, inciso 2°, del Decreto 1382 de 2000; y 38 de la Ley 489 de 1998.

La solicitud satisface las formalidades legales y no se advierten anomalías que invaliden lo actuado, lo cual habilita al Despacho para decidir de fondo el asunto.

Naturaleza jurídica de la acción de tutela

La jurisprudencia constitucional ha pregonado de antaño que la acción de tutela fue instituida como un mecanismo extraordinario para la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violación que pueda derivarse de la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, en los casos previstos en la ley, sin que pueda erigirse en una vía sustitutiva de los medios ordinarios de defensa que el ordenamiento jurídico ha consagrado para salvaguardarlos.

Es claro, entonces, que este instrumento judicial se torna improcedente cuando la persona afectada tuvo o tiene la oportunidad de obtener la protección del derecho que estima amenazado, por los cauces ordinarios y ante las autoridades competentes, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Procedencia de la acción de tutela.

El ciudadano **CARLOS JOSE AVILAN HERMAN** identificado con la cedula de ciudadanía No. 19.339.119 se encuentra legitimado por activa para solicitar el amparo de los derechos fundamentales a la **DE PETICIÓN, DEBIDO PROCESO, SEGURIDAD SOCIAL Y MINIMO VITAL** en virtud de lo dispuesto en el art. 86 de la Constitución Política de Colombia. *“Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”.*

Por su parte, la legitimación por pasiva dentro del trámite de amparo hace referencia a la capacidad legal del destinatario de la acción de tutela para ser demandado, pues está llamado a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental en el evento en que se acredite la misma en el proceso. En el asunto de la referencia, la En el asunto de la referencia **LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES- COLPENSIONES** es una empresa industrial y comercial del Estado organizada como entidad financiera de carácter especial, vinculada al Ministerio de Trabajo, encargada de resolver las solicitudes de reconocimiento de derechos pensionales de los afiliados y pensionados del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, pertenecientes y administrados por el Instituto de Seguros Sociales –ISS; por otra parte COLFONDOS, es una administradora de fondos de pensiones de carácter privado al que estuvo afiliado el accionante, además, **ORGANIZACIÓN LUIS CARLOS SARMIENTO ANGULO, MAZZASA VERONA REMO** fueron empleadores del accionante, y es a quienes se le atribuye vulneración del derecho invocado y de quien se solicita cese su actuar vulnerador.

Derecho Fundamental Invocado Como Vulnerado.

DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN

Con relación al derecho de petición éste se encuentra consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional y fue desarrollado por la Ley 1755 de 2015 donde dispuso el término con el que cuenta el destinatario de dicha petición para responderla el cual manifiesta: “Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción...”

En relación con este derecho fundamental ha precisado la Honorable Corte Constitucional: *“El derecho de petición, pese a su autonomía tiene como fuente material los derechos políticos en la medida en que estos facultan al ciudadano para controlar, directa o indirectamente, las decisiones de las autoridades legítimamente constituidas por obra de la participación popular. El núcleo esencial de este derecho está ligado a la necesidad de mantener canales adecuados de comunicación entre gobernantes y los ciudadanos que trasciendan el ámbito político y vinculen al miembro de la comunidad con la autoridad. El derecho de petición comprende no solo la manifestación de la administración sobre el objeto de la solicitud, sino también el hecho de que dicha manifestación constituya una solución pronta del caso planteado. El derecho fundamental a la efectividad de los derechos (C.P. Arts. 2 y 86) se une en este punto con el principio constitucional administrativo (Art 209).*

La omisión o el silencio de la administración en relación con las demandas de los ciudadanos son manifestaciones de autoritarismo tan graves como la arbitrariedad en la toma de sus decisiones. Los esfuerzos de la Constitución por construir una sociedad más justa y democrática, necesitan ser secundados y de manera esencial por el cumplimiento de la obligación de los funcionarios públicos de responder y resolver de manera oportuna las peticiones provenientes de los particulares.

Por lo menos tres exigencias integran esta obligación. En primer lugar, la manifestación de la administración debe ser adecuada a la solicitud planteada. No basta, por ejemplo, con dar una información cuando lo que se solicita es una decisión. Correspondencia e integridad son fundamentales en la comunicación oficial. En segundo lugar, la repuesta debe ser efectiva para la solución del caso que se plantea. El funcionario no solo está llamado a responder, también debe esclarecer, dentro de lo posible el camino jurídico que conduzca al peticionario a la solución de su problema. Finalmente, la comunicación debe ser oportuna. El factor tiempo es un elemento esencial para la efectividad de los derechos fundamentales; de nada sirve una respuesta adecuada y certera cuando ella es tardía”. (Sent. T-220/94).

El artículo 5 del Decreto 491 de 2020, dispone: “Ampliación de términos para atender las peticiones. Para las peticiones que se encuentren en curso o que se radiquen durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria, se ampliarán los términos señalados en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, así: Salvo norma especial toda petición deberá resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones: (i) Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los veinte (20) días siguientes a su recepción. (ii) Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta y cinco (35) días siguientes a su recepción. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en el presente artículo expresando los motivos de la demora y señalando a la vez

el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto en este artículo.

En los demás aspectos se aplicará lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011.

Parágrafo. La presente disposición no aplica a las peticiones relativas a la efectividad de otros derechos fundamentales”.

DERECHO FUNDAMENTAL DEBIDO PROCESO

“El debido proceso como derecho fundamental, se encuentra consagrado expresamente en el artículo 29 de la Constitución Política, y como primer elemento cabe resaltar su aplicación no solo para los juicios y procedimientos judiciales, sino también para todas las actuaciones administrativas, cuando establece que: “*El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales o administrativas*”. La jurisprudencia de esta Corporación ha precisado que la extensión del debido proceso a las actuaciones administrativas, tiene por objeto garantizar la correcta producción de los actos administrativos, y extiende su cobertura al ejercicio de la administración pública, en la realización de sus objetivos y fines estatales, cobijando todas sus manifestaciones (...). (Sentencia C 341/14).

DERECHO FUNDAMENTAL SEGURIDAD SOCIAL

“El artículo 48 de la Carta Política, dispone que la seguridad social es un derecho irrenunciable y un servicio público en cabeza del Estado, que debe garantizarse a todas las personas “en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad”. Para esta Corporación la seguridad social es un derecho de raigambre fundamental, que debe ser definido de la siguiente manera: “conjunto de medidas institucionales tendientes a brindar progresivamente a los individuos y sus familias las garantías necesarias frente a los distintos riesgos sociales que puedan afectar su capacidad y oportunidad, en orden a generar los recursos suficientes para una subsistencia acorde con la dignidad del ser humano”. (Sentencia T-043/2019).

DERECHO FUNDAMENTAL MINIMO VITAL

El derecho al mínimo vital ha sido definido por esta Corte como "la porción de los ingresos del trabajador o pensionado que están destinados a la financiación de sus necesidades básicas, como son la alimentación, la vivienda, el vestido, el acceso a los servicios públicos domiciliarios, la recreación, la atención en salud, prerrogativas cuya titularidad es indispensable para hacer efectivo el derecho a la dignidad humana, valor fundante del ordenamiento jurídico constitucional". (Sentencia T 678/17).

DEL CASO EN CONCRETO

Corresponde a esta Juzgadora determinar en la presente acción constitucional si la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES** se encuentran vulnerando los derechos fundamentales correspondientes a la **PETICIÓN, DEBIDO PROCESO, SEGURIDAD SOCIAL Y MINIMO VITAL** del señor **CARLOS JOSE AVILAN HERMAN** identificado con la cedula de ciudadanía No. 19.339.119 al no proceder a

reconocer la prestación económica correspondiente a la pensión de vejez – régimen de transición – radicada bajo el No. 2018_8582924.

Se arrimó a esta instancia constitucional copia simple de la cedula de ciudadanía del señor **AVILAN HERMAN**, reportando fecha de nacimiento 21 de julio de 1956, por lo que a la fecha cuenta con 64 años de edad.

Ahora bien, la jurisprudencia constitucional en Sentencia T- 037/16 reseña: “De acuerdo a lo anterior, esta Sala de Revisión considera que, así como la tarea de determinar la edad pensional resulta propia del Congreso, quien deberá fijar desde cuando inicia la tercera edad para efectos de la procedencia de la acción de tutela, será dicha entidad. Por lo tanto, con el fin de proteger la naturaleza excepcional y subsidiaria de la misma, en la presente sentencia será adoptada como criterio para establecer la tercera edad, la expectativa de vida de los colombianos certificada por el DANE correspondiente a los 74 años. Así, quienes cuenten con 74 años o más serán considerados sujetos de especial protección constitucional como pertenecientes a la tercera edad, razón por la cual el estudio de procedencia del amparo constitucional se realizará de manera flexible.” (Subraya fuera de texto”).

Por lo anterior, ha de considerarse que al accionante no le asiste razón al indicar en hecho primero que es sujeto de especial protección en razón a su edad, ello atendiendo los criterios jurisprudenciales de la Alta Corporación.

Además, se anexo reporte de Polisomnograma expedido por el Laboratorio de Sueño de la Clínica de Marly, con fecha 20/03/2009 del que se lee: “ (...) El polisomnograma de CARLOS JOSE AVILAN HERMAN conforma el diagnostico de Síndrome de Apnea Hipopnea obstructiva de sueño con un índice de eventos respiratorios (IAH) severo que causa fragmentación de sueño y desaturación de oxígeno moderada a severa (...)”; Certificación médica CLINICA DE MARLY SA con fecha de expedición 24/09/2014 del que se lee : “ 1. HIPERTENSIÓN ARTERIAL ESTADIO 1”, a efectos de demostrar la condición de salud del accionante, sin embargo, ha de precisarse que aquellos reportan fechas de expedición antiguas y alejadas de la condición de salud del accionante.

Por otra parte, y efectuada la consulta a la Administradora de los recursos del sistema general de seguridad social en salud se verifica que actualmente el actor en estado de afiliación activo, con la entidad EPS FAMISANAR SAS, régimen contributivo; desdibujándose entonces un posible perjuicio irremediable en atención a su condición de salud.

Ahora bien, obra, escrito expedido por Colpensiones del 06 de febrero de 2013 dirigido al señor CARLOS JOSE AVILAN HERMAN con Tipo de Trámite: Afiliación, Traslado de régimen por sentencia unificada 062 del que se lee: “(...) Nos permitimos informarle que su solicitud radicada como se indica en el asunto, ha sido aceptada en forma satisfactoria. Por lo anterior tenemos el agrado de darle la cordial bienvenida a su Administradora de Pensiones, COLPENSIONES”.

Resolución SUB 194574 del 23 de julio de 2019 “POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN TRÁMITE DE PRESTACIONES ECONÓMICAS EN EL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACIÓN DEFINIDA VEJEZ- ORDINARIA” del que se lee: “ Teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución 555 de 2015 y de conformidad con el Memorando GND – 01-2017- del 21 de febrero de 2017, emitido por la Gerencia Nacional de Doctrina se expuso la

problemática que se presentó en el año 2009 en el proceso de traslado de la información de las administradoras del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad al administrador del Régimen de Prima Media.

A la fecha, Colpensiones se encuentra adelantando Verificación Preliminar, conforme a lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley 1450 del 2011 y en la Resolución Interna No. 555 del 30 de noviembre de 2015, nos permitimos informar que la solicitud presentada por usted será atendida una vez finalice la actuación antes referida.

Dicha verificación preliminar se adelanta atendiendo el marco normativo anterior y especialmente lo señalado por la Honorable Corte Constitucional en Sentencia C835 de 2003, que impone la garantía de un debido proceso previo que constante los presupuestos que permitan adoptar una decisión de fondo frente a su solicitud.

Con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de sus derechos fundamentales al debido proceso, contradicción y defensa se respetarán los términos y continuidad de la actuación administrativa; por lo cual podrá presentar recursos contra el presente acto administrativo y nuevas solicitudes”.

Resolución No. SUB 271838 del 02 de octubre de 2019 “POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN TRAMITE DE PRESTACION ECONOMICA EN EL REGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACION DEFINIDA (VEJEZ- RECURSO DE REPOSICIÓN)” de que se lee: “Que conforme lo anterior, el interesado acredita un total de 12, 914 días laborados, correspondientes a 1,844 semanas.

Que nació el 21 de julio de 1956 y actualmente cuenta con 63 años de edad.

Que consultado el aplicativo de Historia Laboral, así como aplicativo SIAFP se pudo evidenciar que el solicitante presento traslado de régimen de ahorro individual con solidaridad, al Régimen de Solidaridad de Prima Media con Prestación Definida, ISS hoy Colpensiones el 30 de octubre de 2012.

Que, de conformidad al ordenamiento vigente antes mencionado, el señor AVILAN HERMAN CARLOS JOSE, cumplió los 62 años de edad el 21 de julio de 2018, razón por la cual mediante radicado 2019_ 4946373, se instancio a la Dirección de Afiliaciones con el fin que revisara la validez del traslado del asegurado, respondiendo lo siguiente:

“Revisados en los diversos aplicativos, se puede verificar que el ciudadano CARLOS JOSE AVILAN HERMAN, CC 19339119, registra en OBF 747 semanas a abril de 1994, es decir no cumple el requisito de las 750 semanas. Por otra parte, y de acuerdo a su fecha de nacimiento (21/07/1956), cumplió la edad (62 años), el 21/07/2018; es decir debió haberse trasladado antes del 21/07/2008; verificando en el aplicativo CONSULTA AFILIADOS y SIAFP, el ciudadano registra traslado de un fondo de pensión al ISS el 30/10/2012, es decir tampoco cumple con este requisito

Así las cosas, el ciudadano no cumple con ninguno de los requisitos, para lo cual se está oficiando a la AFP COLFONDOS informando de dicha situación”

Que, conforme a lo anterior, el traslado efectuado por el solicitante del RAIS a COLPENSIONES no es válido, toda vez que no cumple la condición del literal e de artículo 2 de la Ley 797 de 2003, en cuanto se realizó cuando faltaba menos de 10 años para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez”.

Para resolver confirmar en todas y cada una de sus partes la Resolución No. SUB 194574 del 23 de julio de 2019”.

Resolución DPE 12343 del 31 de octubre de 2019 “POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN TRAMITE DE PRESTACIONES ECONOMICAS EN EL REGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACIÓN DEFINIDA (VEJEZ- RECURSO DE APELACIÓN del que se lee: “Que conforme lo anterior, el interesado acredita un total de 12, 914 días laborados, correspondientes a 1, 844 semanas.

Que nació el 21 de julio de 1956 y actualmente cuenta con 63 años de edad.

Que la Dirección de Afiliaciones a través de radicado Nro. 2019_4946373, señala:

Revisado en los diferentes aplicativos, se puede verificar que el ciudadano CARLOS JOSE AVILAN HERMAN, CC 19339119, registra en OBP747 semanas a abril de 1994, es decir no cumple el requisito de las 750 semanas. Por otra parte, y de acuerdo a su fecha de nacimiento (21/07/1956), cumplió la edad (62 años), el 21/07/2018; es decir debió haberse trasladado antes del 21/07/2008; verificando en el aplicativo CONSULTA AFILIADOS y SIAFP, el ciudadano registra traslado de un fondo de pensión al ISS el 30/10/2012, es decir tampoco cumple con este requisito.

Así las cosas, el ciudadano no cumple con ninguno de los requisitos, para lo cual se está oficiando a la AFP COLFONDOS informando de dicha situación.

Que una vez validado el aplicativo del sistema de información para afiliados a fondos privados – SIAFP, se observa que el señor AVILAN HERMAN CARLOS JOSE, solicito el traslado con destino a Colpensiones el 30 de octubre de 2012, el cual se hizo efectivo a partir del 01 de diciembre de 2012.

Que conforme lo anterior, el traslado efectuado por el solicitante del RAIS a COLPENSIONES no es válido, toda vez que no cumple la condición del literal e del artículo 2 de la Ley de la Ley 797 de 2003, en cuanto se realizó cuando faltaba menos de 10 años para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez”; resolviendo “ARTICULO PRIMERO: Confirmar en todas y cada una de sus partes la Resolución No. SUB 194574 del 23 de julio de 2019 (...)

Certificación expedida por la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones del 29 de abril de 2020 de la que se lee: “Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a CARLOS JOSE AVILAN HERMAN identificado/a con documento de identidad cédula de ciudadanía número 19339119, estuvo afiliado /a al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES y su estado es TRASLADADO A OTRO FONDO”.

Certificado COLFONDOS SA PENSIONES Y CESANTIAS expedida el 29 de abril de 2020 “El (La) Señor (a) CARLOS JOSE AVILAN HERNAN con identificación No. 19.339.119 se encuentra afiliado (a) a Pensión Obligatoria desde el 26 de abril del 1994”.

Certificado COLFONDOS ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS expedido el 05 de junio de 2020 “El (La) Señor (a) CARLOS JOSE AVILAN HERNAN identificado (a) con C.C 19.339.119, se encuentra afiliado (a) al Fondo Pensiones Obligatorias NIT 800.198.644-5”.

Comunicado del 02 de agosto de 2019 dirigido al señor CARLOS JOSE AVILAN HERMAN expedido por Colfondos, del que se lee: “(...) le informamos que Colpensiones valido los requisitos de viabilidad del traslado de régimen hacia su entidad, donde se verificó usted no cumplió con el primer requisito esto es, contar al 1° de abril de 1994, con 750 semanas cotizadas.

(...)

De esta manera, y para efectos de poder soportar la procedencia de su solicitud de traslado hacia Colpensiones, agradecemos nos remita a más tardar dentro de los quince (15) días siguientes al recibo de esta comunicación, los soportes que acrediten las 750 semanas cotizadas al 1° de abril de 1994.

En el evento de no poder soportar el cumplimiento del requisito antes mencionado, le comunicamos que su solicitud de traslado quedara sin efectos legales, por lo cual continuara vinculado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad a cargo de esta sociedad”.

En Sentencia T-090/2018 se reseñó por la Honorable Corte Constitucional: “La Ley 100 de 1993 creó el régimen general de pensiones derogando todos aquellos sistemas existentes previo a su entrada en vigencia; no obstante, en el artículo 36 se instituyó un periodo de tránsito normativo, así:

“Régimen de transición. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

*La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres **o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley”.***

La adopción de esta herramienta jurídica buscaba “proteger a quienes tenían la expectativa legítima de adquirir el derecho a la pensión de vejez de conformidad con los requisitos establecidos en la normatividad anterior”.

En tal contexto, bajo los presupuestos para hacerse acreedor del régimen de transición fueron estatuidos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el afiliado podría continuar con un sistema pensional anterior a la entrada en vigencia de esa norma, esto es, el 1º de abril de 1994, por lo cual al trabajador se le harían exigibles los requisitos (edad y tiempo de servicio -semanas cotizadas-), fijados en ese esquema pensional y no los del régimen de prima media con prestación definida, siempre que acreditaran una de las siguientes condiciones: **i) contar como mínimo con 35 años de edad para las mujeres y 40 para los hombres; y ii) demostrar 15 años o más de servicios prestados.**

El Acto Legislativo 01 de 2005 puso como fecha máxima para disfrutar de este beneficio el 31 de julio de 2010, sin embargo, dejó abierta la posibilidad para que excepcionalmente se extendiera hasta el año 2014, siempre que el afiliado acreditara 750 semanas cotizadas al momento de expedición de la referida reforma constitucional. Así las cosas, quienes no alcanzaran a reunir los requisitos en cita debían someterse al sistema ordinario de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003.

El artículo 2 de la Ley 797 de 2003, dispone. Se modifican los literales a), e), i), del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 y se adiciona dicho artículo con los literales l), m), n), o) y p), todos los cuales quedarán así: Artículo 13. Características del Sistema General de Pensiones. a) La afiliación es obligatoria para todos los trabajadores dependientes e independientes; e) Los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el régimen de pensiones que prefieran. Una vez efectuada la selección inicial, estos sólo podrán trasladarse de régimen por una sola vez cada cinco (5) años, contados a partir de la selección inicial. Después de un (1) año de la vigencia de la presente ley, **el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez.**

Con las pruebas arrojadas, se colige que el traslado efectuado por el solicitante del RAIS a COLPENSIONES no cumple la condición del literal e de artículo 2 de la Ley 797 de 2003, en cuanto se realizó cuando faltaba menos de 10 años para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez; por lo que no advierte la Juzgadora se esté vulnerando los derechos a la seguridad social y mínimo vital.

La Acción de Tutela constituye un logro alcanzado por la colectividad con ocasión de la expedición de la Constitución Política de 1991, para frenar los desafueros de las autoridades públicas, cuando quiera que con hechos u omisiones comprometan los derechos fundamentales de los ciudadanos.

La finalidad de esa acción es lograr que, a falta de vía judicial ordinaria, mediante un trámite preferente y sumario, el juez ante quien se acuda dé una orden de actuar o abstenerse de hacerlo, tendiente a hacer cesar la vulneración o amenaza de violación denunciada.

El artículo 86 de la Constitución Política, así lo consagró. También advirtió su procedencia contra particulares encargados de la prestación de servicios públicos o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de indefensión o subordinación.

En el caso objeto de estudio, pretende la accionante, a través de esta acción constitucional, se le ordene a COLPENSIONES, el reconocimiento y pago de la pensión de vejez del señor

CARLOS JOSE AVILAN HERMAN bajo el **REGIMEN DE TRANSICIÓN**, por cuanto a la entrada en vigencia del Sistema General, es decir, al 01 de abril de 1994, contaba con más de 15 años de servicio cotizado, sobre el tema la corte constitucional en sentencia **T-206/14** señaló:

“El reconocimiento de una prestación pensional o su indexación mediante acción de tutela resulta en principio improcedente, pues el ordenamiento jurídico nacional ha dispuesto medios judiciales específicos para la solución de conflictos de ese origen, sea en la jurisdicción laboral ordinaria o en el contencioso administrativo, según el caso. De tal manera, como los conflictos jurídicos relacionados con la indexación de la primera mesada pensional tienen una vía específica de debate, solo excepcionalmente pueden solucionarse acudiendo a la jurisdicción constitucional, ya para evitar un perjuicio irremediable que afecte derechos fundamentales, ya cuando los procedimientos comunes previstos para el caso concreto hagan ineficaz el derecho invocado.”

Así mismo, conforme lo dispuesto en la sentencia T-344 de 2011, la Corte manifestó: *“...que el juez de tutela no debe indicarle a una entidad encargada del reconocimiento de una pensión, el contenido, alcance y efectos de sus decisiones frente a las solicitudes encaminadas a obtener el reconocimiento y pago de una prestación económica, pues su competencia se circunscribe a verificar que la entidad responsable proporcione una respuesta oportuna y de fondo a las solicitudes presentadas por los presuntos beneficiarios de esta prestación económica...”*.

Teniendo en cuenta el material probatorio, este despacho Constitucional observa con claridad que la accionante no ha agotado la vía de acción ordinaria y cuando la tutelante cuenta con otros recursos o medios de defensa judiciales, el mecanismo Constitucional es improcedente, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Sobre estos requisitos para que proceda la acción de tutela como mecanismo transitorio la Corte Constitucional ha dicho:

“La noción de perjuicio que trae el inciso 2° del numeral 1° del art. 6° del Decreto 2591 y que en su noción básica reproduce el inciso primero del art. 1° del Decreto 306 de 1992, contiene dos elementos que permiten su precisión, a fin de que su amenaza autorice el uso de la acción de tutela como mecanismo transitorio: el primero referido a su carácter “irremediable” y el segundo a que sólo pueda ser reparado en su integridad mediante “indemnización”. Se entiende por irremediable el daño para cuya reparación no existe medio o instrumento. Es el daño o perjuicio que una vez se produce, no permite retrotraer las circunstancias al estado anterior a la vulneración del derecho; y en este sentido debe tomarse la expresión “perjuicio irremediable”. El segundo elemento así lo viene a confirmar cuando predica que el daño, trátase de sus categorías moral ó material, que tiene bien acogidas la jurisprudencia colombiana de tiempo atrás, cuando de considerar la eventualidad del perjuicio irremediable se trata puede ser indemnizado en su integridad”. (Sentencia T-468, del 17 de julio de 1992)”.

De lo anterior fuerza concluir, que no se está, ante un perjuicio irremediable, muy por el contrario, se trata de una contienda de índole legal de la cual debe conocer la jurisdicción Ordinaria para darle solución a la controversia respecto de las inconformidades que alega la

accionante, a fin de obtener el reconocimiento de la pensión de vejez, a la que considera tener derecho.

En consecuencia y conforme a lo ya expresado concluye este despacho Constitucional que no se está vulnerando el derecho a la seguridad social y mínimo vital.

Por otra parte, obra, solicitud dirigida a la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones radicada el 28 de mayo de 2020 en la que el accionante, solicita: "Historia laboral unificada"; el 12 de junio de 2020, Colpesiones, contesta: "(...) me permito indicar que de conformidad a lo establecido en la Ley 1450 del 2011 esta entidad se encuentra adelantando Investigación Administrativa, en aras de verificar presuntas inconsistencias en su historia laboral.

Por lo anterior, una vez finalizado el procedimiento de investigación administrativa se le informara las decisiones adoptadas, a fin de tomar los correctivos a que haya lugar".

De lo anterior, y pese a existir respuesta al derecho de petición es evidente que la contestación no reúne los criterios jurisprudenciales acogidos por la Corte Constitucional pues no resuelve de fondo la solicitud del actor.

Una petición no se considera debidamente tramitado con su recepción, ni tampoco con una respuesta laxa y abierta, pues por mandato constitucional la entidad ante quien se haya elevado la solicitud está en la obligación de proveer al ciudadano de una respuesta pronta que satisfaga plenamente sus deprecaciones, entonces, de no cumplirse con estos supuestos, el juez constitucional, estará en la obligación de requerir a quien vaya en contravía del derecho fundamental para que entre a resolver de manera inmediata el asunto objeto de pedimento, como lo ha reiterado la H. Corte Constitucional en Sentencia T-523/10 de la siguiente manera.

"... c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: **1. oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. ser puesta en conocimiento del peticionario...**" (subrayado y negrilla por el Despacho).

En consecuencia y dando cumplimiento a lo dicho por la H. Corte Constitucional, y como quiera que, a la presentación de este Instrumento Constitucional, no se ha dado respuesta de fondo, clara y precisa al derecho de petición solicitado por la accionante, se considera que no se han satisfecho los requisitos jurisprudenciales establecidos para tal fin.

En eventos como el del caso bajo estudio, la Corte ha reconocido que la omisión de respuesta constituye una violación de este derecho fundamental, y que además da lugar a su protección mediante la acción de tutela, lo cual puede acarrear sanciones disciplinarias para el funcionario que negligentemente ha omitido cumplir con su deber. Así lo sostuvo esta Corporación en la sentencia T-242/93.

Por lo anterior, se encuentra probado que dicha demora va en detrimento de los intereses de la accionante, pues debido a las inconsistencias que reporta en su historia laboral no ha podido tener claridad sobre su historial laboral. Por lo que, y sin más consideraciones se tutelaré el derecho de petición, en consecuencia, se ordenará a la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES**, para que dentro del término de

cuarenta y ocho horas (48 h.) contadas al recibo de la respectiva comunicación, proceda a resolver de forma y de fondo la petición elevada a través de apoderado judicial por el señor **CARLOS JOSE AVILAN HERMAN**, radicado bajo el No. 2020_5223279 de fecha 28 de mayo de 2020.

Así mismo, deberá notificar en debida forma la respuesta a darse al derecho de petición a la accionante, a las direcciones indicadas en el derecho de petición radicado ante esa entidad. Y remitir copia de la misma a este Despacho Judicial conforme las prescripciones del artículo 23 del Decreto 2591 de 1991.

Finalmente, se ordena desvincular a la entidad **GRUPO AVAL** atendiendo que de la revisión de los hechos y derechos no se advierte que haya incurrido en acción u omisión que pueda derivar la vulneración de los derechos fundamentales invocados por el accionante.

Por lo expuesto, este Despacho Constitucional no tutelara las pretensiones y derechos de la accionante.

EN MÉRITO DE LO EXPUESTO, EL JUZGADO TREINTA DE FAMILIA DE BOGOTÁ D.C., ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,

RESUELVE

PRIMERO: NO TUTELAR los derechos fundamentales **A LA SEGURIDAD SOCIAL Y MINIMO VITAL** del accionante, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: Tutelar el Derecho de Petición invocado por el señor **CARLOS JOSE AVILAN HERMAN** identificado con la cedula de ciudadanía **No. 19.339.119**, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Ordenar al director y/o representante legal de la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES”** o quien haga sus veces, que, si todavía no lo ha hecho, proceda a resolver de fondo a más tardar dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del presente fallo, la petición elevada a través de apoderado judicial por el señor **CARLOS JOSE AVILAN HERMAN** radicado bajo el No. 2020_5223279 de fecha 28 de mayo de 2020 y remitir copia de la misma a este Despacho Judicial conforme las prescripciones del artículo 23 del Decreto 2591 de 1991. **Ofíciense.**

TERCERO: Contra el presente fallo procede impugnación por la vía jerárquica.

CUARTO: Remitir el expediente a la Honorable Corte Constitucional, para la eventual revisión del fallo de tutela, en caso de no ser impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación.

QUINTO: Notificar esta decisión a las partes por el medio más expedito. Líbrense comunicaciones.

NOTIFÍQUESE,

Firmado Por:

**VIVIANA MARCELA PORRAS PORRAS
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 30 FAMILIA BOGOTÁ**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

c42fef58d6f6a01ace7b72da68a799108fd615d83e9b9e85fd560364f1ed335c

Documento generado en 13/08/2020 04:56:23 p.m.